



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, tres (03) de septiembre dos mil veinte (2020)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 33 33 004 **2019 00118 00**
Demandantes: Jaime Bronstein Ríos
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

I. ASUNTO

El proceso ingresa al Despacho para efecto de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA. Sin embargo, por aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020, se adoptarán las decisiones del caso.

II. ANTECEDENTES

Mediante auto de 12 de septiembre de 2019, el Despacho admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Jaime Bronstein Ríos frente a la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional contestó la demanda, a través de memorial radicado el 12 de diciembre del año anterior, y formuló la excepción que denominó *“inexistencia del derecho”*.

El 3 de febrero de la presente anualidad, la Nación -Ministerio de Defensa Policía Nacional contestó la demanda y propuso las excepciones denominadas: i) *“inexistencia del derecho y falta de fundamento jurídico para las pretensiones”*, ii) *“presunción de legalidad”* y iii) *“falta de legitimación en la causa por pasiva”*.

El traslado de las excepción se corrió conforme lo dispone el parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA, entre el 6 y el 10 de marzo de 2020, oportunidad dentro de la cual la parte actora efectuó pronunciamiento.

Ahora bien, durante el curso de esta actuación, a través de la Resolución No 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decretó Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID 19 y mitigar sus efectos.

Como consecuencia de lo anterior, a través de Acuerdo PCSJA20-11517 de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la suspensión de términos judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el día 20 del mismo mes y año, salvo

en aquellos despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tuvieran programadas audiencias con persona privada de la libertad. Adicionalmente, se exceptuó el trámite de acciones de tutela.

Esta medida de suspensión de términos judiciales se prorrogó en distintas ocasiones, mediante los Acuerdos PCSJA20-11518, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA-11556 de 2020, por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia por el COVID-19, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial.

Por medio de Acuerdo PCSJA-11567 de 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del día 1.º de julio de 2020, inclusive, y dispuso las medidas pertinentes para la reanudación de la atención al público, el normal funcionamiento de los despachos judiciales y se dictaron otras medidas de salubridad pública y fuerza mayor.

A través del Decreto Legislativo No 806 de 04 de junio 2020, el Gobierno Nacional adoptó unas medidas de orden procesal para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Por último, mediante Acuerdo PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura ratificó el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del 1.º de julio de 2020, y puntualizó que las sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial no prestarán atención presencial a usuarios, a menos que de manera excepcional se requiera.

III. CONSIDERACIONES

a. De las excepciones

Para comenzar es necesario advertir que, el Decreto Legislativo 806 de 2020 contiene normas procesales concernientes a la sustanciación de los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por consiguiente, por disposición del principio general de la aplicación inmediata de las leyes procesales¹, corresponde

¹ Código General del Proceso. Artículo 624. *Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:*

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

aplicar las previsiones del referido Decreto, norma que entró en vigencia a partir del 04 de junio del año que avanza.

Así las cosas, conforme a lo dispuesto en el inciso 2.º artículo 12 *ibídem* las excepciones previas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se formularán y decidirán, según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, disposición que también es aplicable a las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. Luego, en aplicación de lo normado en el numeral 2.º del referido artículo 101, cuando no requieran practica de pruebas, tales excepciones deben resolverse antes de la audiencia inicial.

En este entendido, el Despacho procederá a pronunciarse sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación -Ministerio de Defensa Policía Nacional, así:

- De la falta de legitimación en la causa por pasiva

Al respecto, la apoderada de la Nación- Ministerio de Defensa Policía Nacional explicó que la Caja de Sueldos de la Policía Nacional -CASUR- era un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, por tanto, era una entidad ajena e independiente de la Policía Nacional, por consiguiente, no podía pretenderse la unión de estas dos entidades como sujeto pasivo único de la relación procesal, de manera que, a su juicio, el argumento de la parte convocante, basado en la intervención de la Policía Nacional en la hoja de servicios del uniformado, no resultaba aplicable para extender los efectos de un acto administrativo que no fue expedido por la institución policial.

Por su parte, el apoderado del demandante afirmó que la excepción carecía de fundamento, comoquiera que se pretendía desconocer que el señor Jaime Brostein Ríos estuvo al servicio de la Policía Nacional, y que entre el lapso comprendido entre los años 1992 a 2004, sus salarios se vieron empobrecidos; asimismo, se buscaba justificar la negligencia, inactividad, pasividad y lesividad que configuraron la culpa del Estado, al no reconocer el ajuste de los salarios de todos los servidores públicos, de acuerdo a la inflación causada y acumulada, desconociendo el derecho a mantener el poder adquisitivo, el cual gozaba de garantías constitucionales como son la favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad.

Frente a las anteriores consideraciones, conviene señalar que la legitimación en la causa por pasiva puede ser de hecho o material, la primera, es aquella originada entre las partes a partir de la integración del contradictorio, y la segunda, la que se configura cuando quien es llamado a responder por la pretensión, en efecto, tiene el deber jurídico de satisfacerla.

En otras palabras, la legitimación de hecho en la causa por pasiva deviene de la presentación de la demanda y la notificación del auto admisorio, lo cual no necesariamente trae aparejada la legitimación material, consistente en la real

participación de los hechos que fundamentan las pretensiones del demandante, aspecto que se sujeta a las pruebas practicadas en el proceso, su valoración y a la conclusión a la que el fallador arribe en sentencia y, por tanto, presupuesto para la prosperidad de las pretensiones.

De conformidad con lo expuesto, al considerar que se ha propuesto la falta de legitimación en la causa de tipo material, el mismo corresponde a un tema de fondo que no es pasible de resolverse de manera previa, por consiguiente, el Despacho resolverá la excepción planteada por la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional, al momento de proferir sentencia de primera instancia.

b. Del decreto de pruebas

El artículo 13 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020 establece la posibilidad de dictar sentencia anticipada cuando se trate de asuntos de puro derecho o que no fuere necesario practicar pruebas, *“caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia se proferirá por escrito”*.

Por tanto, corresponde al Despacho decidir sobre el decreto de las pruebas solicitadas y aportadas por las partes en la demanda y sus contestaciones, en los siguientes términos:

1. Parte demandante

Pruebas aportadas

Con el valor probatorio que les confiere la Ley, téngase como pruebas documentales las aportadas con la demanda, visibles a folios 69 a 104 del expediente las cuales consisten en:

1. Copia del documento de identidad del accionante.
2. Hoja de servicios del señor Jaime Bronstein Ríos.
3. Resolución N.º 06476 de 19 de octubre de 2005, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de asignación mensual de retiro al demandante.
4. Resolución N.º 4323 de 13 de junio de 2014, por medio de la cual se modificó la Resolución N.º 06476 de 19 de octubre de 2005.
5. Petición radicada el 6 de diciembre de 2018 ante la Dirección General de la Policía Nacional.
6. Petición radicada el 6 de diciembre de 2018 ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
7. Oficio N.º S-2018-068291/ANOPA-GRULI-1.10 de 21 de diciembre de 2018, emitido por el jefe Grupo de Liquidación de Nomina de la Policía Nacional.
8. Oficio N.º E00001-201903948-CASUR Id 403531 de 25 de febrero de 2019, expedido por el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
9. Oficios nros 20144000138271 de 1 de octubre de 2014 y 20154000090691 de 29 de mayo de 2015, suscritos por director de Desarrollo y Organizacional

del Departamento Administrativo de la Función Pública, junto con sus respectivos anexos.

10. Oficio N.º 21756 de 21 de marzo de 2011 firmado por el director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
11. Certificado de existencia y representación de Soluciones Jurídicas JIREH SAS.
12. Acta expedida por la Procuraduría 121 Judicial II para Asuntos Administrativos el 20 de junio de 2019.

Pruebas solicitadas:

El Despacho denegará el decreto de los testimonios de los doctores Alberto Carrasquilla Barrera, ministro de Hacienda y Crédito Público; Guillermo Botero Nieto, ministro de Defensa; Fernando Antonio Grillo Rubiano, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y del general Jorge Alirio Leguizamón, director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y/o quienes hagan sus veces, para que declaren sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar relacionadas con los hechos 1 a 14 y 16 a 18, comoquiera que por disposición del artículo 217 del CPACA, *“no valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas”*. En cambio, con sustento en la misma norma, la parte demandante podía pedir que los representantes de estas entidades rindan *“informe escrito bajo juramento”*.

Ahora bien, el decreto de este informe tampoco se encuentra justificado toda vez que los hechos de la demanda hacen referencia a los siguientes aspectos: la fecha en la cual el señor Bronstein ingresó a la Policía Nacional, la expedición y contenido de la Ley 4.^a de 1992, los Decretos 87 y 921 del mismo año, 107 de 1996, 122, 1758 y 2072 de 1997; los Decretos por medio de los cuales se ajustó año a año la asignación básica y gastos de representación de los ministros de despacho y los que fijaron los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, oficiales, suboficiales, personal ejecutivo y agentes de la Policía Nacional y los empleados públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; asimismo, acerca de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-931 de 2004, lo consagrado en el artículo 271 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la expedición de la hoja de servicios del accionante, con base en la cual le fue reconocida la asignación del retiro, la no actualización plena ordenada por la Corte Constitucional, mediante los Decretos 324 y 330 de 2018, y la petición elevada ante la Policía Nacional para la reliquidación de la asignación mensual, conforme a la inflación causada y acumulada entre los años 1992 y 2004.

Es decir, a la luz del artículo 168 del CPG, esta prueba no es conducente o idónea para acreditar dichos hechos, al considerar que busca probarse aspectos propios de la hoja de servicios del demandante, el reconocimiento de la asignación de retiro y las reclamaciones ante la Administración, que pueden acreditarse a través de los documentos aportados con la demanda, y de la expedición de normas salariales y prestacionales de las Fuerzas Militares y de Policía, cuerpos normativos que no requieren ser probados, según lo establecido en el artículo 177 del CGP. Igual situación se presenta con lo relativo a la Sentencia C-931 de 2004, pues la misma puede

consultarse en la página web de la Corte Constitucional, a fin de verificar las órdenes que en esta se impartieron; además, al tratarse de un pronunciamiento judicial su valoración y posterior aplicación al caso concreto, por efecto del precedente jurisprudencial, corresponde al juez de conocimiento.

En suma, comoquiera que la prueba testimonial en los términos solicitados por el apoderado del accionante resulta inconducente e inútil no hay lugar a su decreto.

2. Parte Demandada

2.1. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Pruebas aportadas

Con el valor probatorio que les confiere la ley, téngase como prueba documental la aportada con la contestación, consistente en CD contentivo de antecedentes administrativos que dieron origen al presente medio de control (f. 139).

2.2. Nación- Ministerio de Defensa Policía Nacional

Pruebas aportadas

Con el valor probatorio que les confiere la ley, téngase como prueba documental la aportada con la contestación, visibles a folios 151-190, las cuales consisten:

- 1. Hoja de servicios e historia laboral del actor (medio magnético).
- 2. Extracto de hoja de vida del accionante.
- 3. Extracto salarial expedido por CASUR.
- 4. Respuesta a derecho de petición
- 5. Petición radicada por la parte accionante.
- 6. Comunicación N.º S-2019-0578/ARED-GRUFI-29, mediante la cual se aportan certificaciones salariales del demandante.

c. Aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020

En virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 806 de 2020, las partes y demás sujetos procesales deberán realizar todas las actuaciones a través de medios tecnológicos, y enviar un ejemplar de todos los memoriales en formato PDF o actuaciones que realicen a todos los extremos procesales, **simultáneamente** con copia incorporada al mensaje enviado al Despacho, a través de los canales digitales que a continuación se señalan, según la información que reposa en el proceso:

Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja	correspondenciajadmtun@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ministerio Público	prociudadm177@procuraduria.gov.co
Parte demandante	juridicasjireh@hotmail.com y jarciniegasrojas@hotmail.com
CASUR	judiciales@casur.gov.co

Policía Nacional	deboy.notificacion@policia.gov.co
------------------	--

d. Otras disposiciones

El Despacho antes de pronunciarse sobre la renuncia al poder por el abogado Germán Eduardo Toasura Rodríguez, respecto al conferido por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, concederá el término de tres (3) días para efecto de que se cumpla la exigencia prevista en el artículo 76 del CGP, consistente en la comunicación enviada a la entidad. Además, se advertirá que la renuncia *“no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido”*

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Diferir al momento de la sentencia, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, presentada por la apoderada de la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional.

SEGUNDO.- Incorporar con el valor legal que les correspondan los documentos aportados por las partes con los escritos de demanda y contestación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Negar el decreto de la prueba testimonial solicitada por la parte demandante, con fundamento en los argumentos expuestos *up supra*.

CUARTO.- Advertir a las partes y demás sujetos procesales que, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, deberán enviar un ejemplar de todos los memoriales en formato PDF o actuaciones que realicen, **simultáneamente** con copia incorporada al mensaje enviado al Despacho, a través de los canales digitales reseñados en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO.- Reconocer personería al abogado Germán Eduardo Toasura Rodríguez, identificado con C.C. 1.049.613.160 y T.P. 252.110 del C. S. de la J., para actuar como apoderado de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en los términos y para los efectos del poder visible a folios 133 del expediente.

SEXTO.- Conceder el término de tres (3) días abogado Germán Eduardo Toasura Rodríguez, para efecto de que aporte la comunicación enviada a la entidad sobre la renuncia al poder. **Advertir** al profesional del derecho que la renuncia *“no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido”*

SÉPTIMO.- Reconocer personería a la abogada Nancy Alejandra Sandoval Sarmiento, identificada con C.C. 1.057.576.690 y T.P. 197.740 del C. S. de la J., para actuar como apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa- Policía Nacional, en los términos y para los efectos del poder visible a folios 191 del expediente.

OCTAVO.- Una vez en firme la presente decisión, el asunto pasará al Despacho para disponer el trámite procesal que legalmente corresponda.

Notifíquese² y cúmplase

Firmado Por:

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

c9f067cba3e5a5a6cec967fb2b1bd9424fadafd19191a9ebb8384c406138da4a

Documento generado en 03/09/2020 11:29:49 a.m.

**Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad
del Circuito de Tunja**

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La anterior providencia se notifica por
estado electrónico N.º 26
de hoy 4 de septiembre de 2020, a las 8:00 a. m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario